



Para entender la crisis en Honduras

Octubre de 2018

La caravana de miles de hondureños que han decidido dejar su país para buscar mejores condiciones de vida es reflejo de la crisis social que vive Honduras, resultado de políticas económicas importadas y décadas de corrupción e impunidad. Se trata de un drama humano que se convierte en un llamado a la hospitalidad de los mexicanos para atender la emergencia, pero también se convierte en un llamado internacional a las autoridades hondureñas para resolver los problemas estructurales.

El CIAS POR LA PAZ A.C., en su misión de atender las causas culturales y estructurales de las violencias, presenta este recuento histórico, desde un enfoque de la Reconstrucción del Tejido Social, con la intención de ayudar a comprender la crisis social que vive Honduras y la responsabilidad que ha tenido la élite económica norteamericana en su desarrollo.

El presidente Donald Trump rechaza contundentemente la llegada de los hermanos hondureños a su territorio, como si se tratara de un problema ajeno a su país, cuando la situación actual que vive Honduras también es consecuencia del intervencionismo de las empresas bananeras norteamericanas en la vida política de ese país durante todo el siglo XX; los cambios estructurales que los organismos financieros norteamericanos exigieron a cambio de créditos para el “desarrollo” a finales del siglo XX, y la política migratoria aplicada por George Bush, en la década de los años 90, que originó el problema de las maras.

Veamos un poco de historia. Honduras no tuvo un centro importante de evangelización en el tiempo de la Colonia, la religiosidad popular no quedó arraigada como pudo hacerse en Guatemala o México. No se constituyeron los símbolos de identidad que ayudaran a la cohesión social. A esto se agrega que el país se organizó con un Estado Liberal que en 1857 suprimió la propiedad comunal indígena y las cofradías, defendiendo la propiedad privada como símbolo de la nueva libertad e igualdad alcanzada por la independencia.

Es así que la Constitución de 1880 puso las bases jurídicas para estimular la orientación económica hacia la exportación, dejando al margen a la mayoría de la población. En 1911 llegó al poder el general Manuel Bonilla, quien contactó en su exilio a Samuel Zemurray, un empresario bananero radicado en Estados Unidos, y le proporcionó un barco de guerra y pertrechos militares para llegar al poder a cambio de tierras y privilegios fiscales a las empresas bananeras.

El estado hondureño amplió el régimen de concesiones desde 1912 a las empresas bananeras. Otorgaba 500 hectáreas de tierra por cada kilómetro de tren construido en los departamentos de Cortés, Yoro y Colón. El poder económico de las bananeras se incrementó al diversificar sus inversiones y se tradujo también en poder político. Este se utilizaba para obtener nuevas concesiones, exenciones y privilegios fiscales.

La crisis económica mundial de 1929 repercutió en Honduras con el despido de empleados de las empresas bananeras y la reducción de salario. Esto hizo organizar a los obreros para reclamar sus derechos y obtener mejoras económicas, acciones que fueron reprimidas por órdenes de la diplomacia de los Estados Unidos.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

La Constitución de 1957 proponía una reforma agraria, la cual fue cancelada por presiones de las empresas bananeras en 1962. El incremento de las protestas campesinas obligaron al gobierno a elaborar una nueva Ley de Reforma Agraria (1975); se expropiaron 22 mil manzanas de tierra incultas, pertenecientes a la Standard Fruit Company. En 1976 se quiso expropiar 35 mil manzanas a la Tela Railroad Company, y las presiones de la empresa bananera obligaron a anular los acuerdos de expropiación. Las masacres de La Talanquera (1972) y Los Horcones (1975) fueron las reacciones más conocidas de los terratenientes para conservar sus privilegios.

A inicios de 1982, el Partido Liberal asumió el gobierno y creó expectativas favorables a la democratización del país. Sin embargo, se siguió supeditando la democracia a las Fuerzas Armadas. El discurso para legitimar la presencia de los militares americanos era la “seguridad nacional”, la cual no sólo se refería a defenderse de los comunistas de los países vecinos, sino también de los “enemigos internos”.

Por otro lado, la caída del muro de Berlín en 1989 bajó las tensiones internacionales de la Guerra Fría, que unido al descrédito que tenían las fuerzas militares hondureñas y norteamericanas por ser acusadas de estar involucrados en el narcotráfico para financiar la ofensiva contra la guerrilla, condujo a la reducir la presencia de fuerzas militares norteamericanas del territorio hondureño.

En la década de los años 90, el nuevo contexto geopolítico condujo a Estados Unidos a iniciar un proceso de capitalización que se tradujo en el Consenso de Washington. Este consistió en renegociar la deuda con los países latinoamericanos, otorgando nuevos créditos a cambio de realizar reformas estructurales que permitieran pagar la deuda y los nuevos créditos. Esto se tradujo en políticas para reducir los subsidios estatales a la economía, reducir el gasto social, emprender la modernización administrativa para reducir la burocracia, la privatización de empresas estatales, el abandono del control de los precios en el mercado interno y la reducción de aranceles de las importaciones. El objetivo principal era capitalizar a los estados latinoamericanos para que pudieran pagar las deudas a los organismos internacionales.

Los efectos más importantes de esta primera etapa de la aplicación del neoliberalismo fue la inestabilidad económica. En los primeros años de la década de 1990 cae drásticamente el empleo, se reducen los salarios reales, se eleva el costo de la vida y se da una fuga de capitales. El sector campesino fue de los más afectados, porque se eliminan los subsidios a la producción agrícola, se cierran instituciones del sector acusadas de ineficaces y se sustituye la reforma agraria por la modernización agrícola. El incremento de la pobreza se tradujo en tensiones sociales que afectaron aún más los débiles sistemas comunitarios.

El sector urbano recibe a jóvenes deportados de Estados Unidos con las política de limpieza social que realiza George Bush en 1992, los cuales conocían maneras de hacer frente a la exclusión social por medio de las pandillas americanas, y es así que se configura un nuevo actor social: las maras. Estos jóvenes llegan en un momento donde la misma situación económica había obligado a muchas madres emigrar a los Estados Unidos. Muchos niños y jóvenes perdieron las figuras de autoridad necesarias para modelar normas sociales para la convivencia y el respeto hacia los demás. Los adolescentes que empiezan a crear sus propios grupos de referencia en la calle van a encontrarse con los deportados que traían la escuela de las



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

pandillas de Los Ángeles, ya involucradas en la delincuencia organizada. “Entre 1997 y 1998, el gobierno de los Estados Unidos deportó a cerca de nueve mil hondureños, a los que se sumaron más de 22 mil que fueron deportados desde México hasta octubre de 1997” (Barahora, 2005, 288).

En octubre de 1998 un desastre natural agudiza aún más el fracturado tejido social: el huracán Mitch. Se calcula que fueron cerca de 8,000 muertos en todo el país, y que los daños ocasionados representaban económicamente el retraso del país de 20 años. El desastre no permite reconstruir los vínculos de una sociedad civil de por sí desarticulada. La contracción de la economía, que trajo como consecuencia este fenómeno natural, unido a las deportaciones masivas de personas involucradas en la delincuencia organizada, y los débiles sistemas comunitarios que contuvieran la criminalidad, crearon las condiciones para acelerar la organización del narcotráfico en Honduras.

Un hecho que mostró la débil institucionalización de la democracia en Honduras fue el golpe de Estado realizado en el año 2009, para destituir al presidente Manuel Zelaya. El proponer reformas que afectaban a la élite económica dominante condujo a su destitución. Los jesuitas de Honduras señalaban que “el golpe de Estado contribuyó también a incrementar el número de concesiones de explotación otorgadas a nacionales e internacionales, en este caso de forma ilegítima y en menoscabo de los intereses comunitarios y las localidades usufructuarias de tales recursos antes del otorgamiento de las licencias de explotación”. Lo cual muestra la constante que hemos analizado en este recuento histórico, la predominancia del factor económico a favor de una élite por encima de sus habitantes, quienes en un éxodo masivo hoy deciden abandonar el país.

Las imágenes de este éxodo son símbolo del fracaso de una política económica inspirada en el ideario liberal. En este momento donde el presidente Donald Trump se niega a recibir a los hermanos hondureños en el territorio norteamericano, es necesario que asuma las consecuencias de la política exterior de este país y el enojo social que genera un desarrollo desigual en la región.

P. Jorge Atilano González Candia SJ
Director